

Pereira Peroni y Otros (Caso de Radical Radio y Radio Su-Versión) vs. Chirilagua

ESTADO

ÍNDICE

I. ABREVIATURAS	III
II. BIBLIOGRAFÍA.....	VI
LIBROS	VI
DOCUMENTOS LEGALES.....	VI
JURISPRUDENCIA.....	VI
Corte Interamericana de Derechos Humanos	VI
Corte Europea de Derechos Humanos	XI
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.....	XV
Corte Internacional de Justicia.....	XVI
CASOS NACIONALES	XVI
OTROS DOCUMENTOS	XVI
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales	XVI
Declaraciones conjuntas de los Relatores sobre Libertad de Expresión.....	XVI
Otros documentos	XVII
III. HECHOS	1
IV. ASPECTOS PRELIMINARES DE ADMISIBILIDAD Y COMPETENCIA.....	2
Incompetencia de la Corte <i>rationae personae</i>	3
Respecto de Radical Radio y Radio Su-Versión como víctimas	4
Respecto de Melanie Pereira, Byron Dayle y Francis Hoffman como víctimas	5
Falta de Agotamiento de Recursos Internos	7
V. ASPECTOS DEL FONDO DEL ASUNTO.....	10
Supuestas violación del art. 13 en conexión con el art. 1.1 de la CADH derivada de la cancelación de la concesión con la que operaba Radical Radio	10
Supuesta violación del art. 13 en conexión con el art. 1.1 de la CADH derivada del cierre de Radio Su-Versión	13
Supuesta violación del art. 21 en conexión con el art. 1.1 de la CADH derivada de la confiscación de equipos de transmisión	15
Supuesta violación del art. 24 en conexión con los arts. 1.1 y 2 de la CADH	16
Supuesta violación de los arts. 13 y 9 en conexión con el art. 1.1 de la CADH respecto de las condenas penales.	17
Respecto de las condenas por el delito de “Hurto de bienes del Estado”	17
Respecto de las condenas por el delito de “Instigación a delinquir” y “Homicidio”	20

Respecto de las condenas por el delito de “Difamación”	24
Supuesta violación de los arts. 8 y 25 en conexión con el art. 1.1 de la CADH	28
VI. PETITORIO	30

I. ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
ACOSINTI	Asociación de Comunidades Sin Tierra de San Pedro de los Aguados.
AMARC	Asociación Mundial de Radios Comunitarias
Art. ó Arts.	Artículo o Artículos
CADH	Convención Americana sobre Derechos Humanos
CC	Constitución de Chirilagua
CEDH	Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Convención Europea de Derechos Humanos).
CESCR	Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
CIDH, Comisión	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ICJ	Corte Internacional de Justicia
COFERETEL	Comisión Federal de Regulación de Telecomunicaciones.
Corte EDH. ECHR	Corte Europea de Derechos Humanos
Corte IDH, Corte Interamericana, Corte	Corte Interamericana de Derechos Humanos
CPC	Código Procesal de Chirilagua
DPLE	Declaración de Principios de la Libertad de Expresión

ESAP	Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas
LOT	Ley Orgánica de Telecomunicaciones.
MP	Ministerio Público.
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PIDCP	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
SIDH	Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Sr.	Señor
Sra.	Señora.

II. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Lucero Espinoza, Manuel. *Compendio de Derecho Administrativo*. Ed., Porrúa, México, 2005, Primer curso. P. 12.
- Delgadillo, Luis Humberto. *Elementos de Derecho Administrativo*. Ed., Limusa, Noriega Editores, México, Primer Curso. P. 12.
- Faundéz Ledesma, Héctor. *El sistema interamericano de protección de los derechos humanos*. 3^a. ed., San José, C.R, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004. P. 3.
- González Luna Bueno, Federico, Soria Gutiérrez, Gerardo, y Tejado Donde, Javier. *Regulación de las Telecomunicaciones*. Ed., Miguel Ángel Porrúa, México, 2007. P.12.
- Pavón Vasconcelos, Francisco. *Derecho Penal Mexicano, Parte General*. 19na Edición, Ed. Porrúa, México 2006. P. 19.

DOCUMENTOS LEGALES

- Corte IDH. *Reglamento de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos*, aprobado en el LXXV período ordinario de sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009. P. 2.

JURISPRUDENCIA

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Casos

- Corte IDH. *Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. P. 13.

- Corte IDH. *Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198. P. 15.
- Corte IDH. *Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154. P. 8.
- Corte IDH. *Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela*. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182. P. 10.
- Corte IDH. *Caso Bulacio Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100. P. 14.
- Corte IDH. *Caso Cantos Vs. Argentina*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85. P.4.
- Corte IDH. *Caso Castañeda Gutman Vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184. P.11.
- Corte IDH. *Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de Septiembre de 1998. Serie C No. 41. P. 21.
- Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. P. 28.
- Corte IDH. *Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C No. 146. P.3.

- Corte IDH. *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170. P.4.
- Corte IDH. *Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Septiembre de 2009. Serie C No. 204. P. 9.
- Corte IDH. *Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú*. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. P. 29.
- Corte IDH. *Caso Escher y otros Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200. P. 9.
- Corte IDH. *Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6. P. 29.
- Corte IDH. *Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126. P. 30.
- Corte IDH. *Caso Gangaram Panday Vs. Suriname*. Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de Diciembre de 1991. Serie C No. 12. P.8.
- Corte IDH. *Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de Noviembre de 2005, Serie C No. 137. P. 3.
- Corte IDH. *Caso Garibaldi Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203. P.9.
- Corte IDH. *Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30. P. 9.

- Corte IDH. *Caso Godínez Cruz Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5. P.29.
- Corte IDH. *Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153. P.4.
- Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107. P. 10.
- Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. P. 15.
- Corte IDH. *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196. P. 9.
- Corte IDH. *Caso Nogueira de Carvalho y otros Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161. P.8.
- Corte IDH. *Caso Palamara Iribarne Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. P.10.
- Corte IDH. *Caso Perozo y otros Vs. Venezuela*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. P.10.
- Corte IDH. *Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133. P.10.
- Corte IDH. *Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197. P.8.
- Corte IDH. *Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 11.1. P.10.

- Corte IDH. *Caso Ríos y otros Vs. Venezuela*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194 P. 9.
- Corte IDH. *Caso Salvador Chiriboga vs Ecuador*. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179. P.15.
- Corte IDH. *Caso Tristán Donoso Vs. Panamá*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193. P.18
- Corte IDH. *Caso Usón Ramírez vs Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de Noviembre de 2009, Serie C No. 207. P. 21.
- Corte IDH. *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. P.9.
- Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4. P. 29.
- Corte IDH. *Caso Yatama vs. Nicaragua*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Junio de 2005. Serie C No. 127. P. 17.
- Corte IDH. *Caso Yvon Neptune Vs. Haití*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180. P. 21.
- Corte IDH. *Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de Junio de 1987, Serie C No. 1. P. 2.

Opiniones Consultivas

- Corte IDH, *Asunto Viviana Gallardo y otras*. 13 de Noviembre de 1981, Serie A No.10181. P. 8.
- Corte IDH. *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados*. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de Septiembre de 2003. Serie A No. 18. P.17.
- Corte IDH. *La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos)*. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. P.10
- Corte IDH. *Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización*. Opinión Consultiva OC- 4/84 del 19 de Enero de 1984. Serie A No. 4. P. 17.

Corte Europea de Derechos Humanos

- ECHR, *Case of Barthold v. Germany*, Judgment of 31 January 1986, Application No. 8734/79.
- ECHR, *Case of The Sunday Times v. United Kingdom*, Judgment of 26 April 1979, Application No. 6538/74.
- ECHR. *ABC v. Austria*, Judgment of 20 October 1997, Application No. 109/1996/728/925.
- ECHR. *Arslan v. Turkey*, Judgment of 8 July 1999, Application No. 23462/94.
- ECHR. *Balsyte-Lideikiene v. Lithuania*, Judgment of 4 November 2008, Application No. 72596/01.
- ECHR. *Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway*, Judgment of 20 May 1999, Application No. 21980/93.

- ECHR. *Case "relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium" v. Belgium*, Judgment of 23rd July 1968, Application No. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64, Series A 1968.
- ECHR. *Case of Lingens vs. Austria*, Judgment of 6 July 1986, Application No. 9815/82.
- ECHR. *Case of Petrovic v. Austria*, Judgment of 27th of March 1998, Application No. 156/1996/775/976, Reports 1998-II.
- ECHR. *Case of Wessels-Bergervoet v. The Netherlands*, Judgment of 4th June 2002, Application No. 34462/97.
- ECHR. *Case of Wessels-Bergervoet v. The Netherlands*, Judgment of 4th June 2002, Application No. 34462/97.
- ECHR. *Case of Willis v. The United Kingdom*, Judgment of 11 June 2002, Application No. 36042/97.
- ECHR. *Ceylan v. Turkey*, Judgment of 8 July 1999, Application No. 23556/94.
- ECHR. *Chauvy and Others v. France*, Judgement of 29 June 2004, Application No. 64915/01.
- ECHR. *Colombani and Others v. France*, judgment 22 June 2002, Application No. 51279/99.
- ECHR. *Constantinescu v. Romania*, Judgment 27 June 2000, Application No. 28871/95.
- ECHR. *Cumpănă and Mazăre v. Romania*, Judgment of 17 December 2004, Application No. 33348/96.
- ECHR. *Dichand and Others v. Austria*, Judgment of 26 February 2002, Application No. 29271/95.

- ECHR. *Eckle v. Germany*, Judgment of 15 July 1982, Application No. 8130/78, Series A no. 51.
- ECHR. *Europapress Holding D.O.O. v. Croatia*, Judgment of 22 October 2009, Application No. 25333/06.
- ECHR. *Feldek v. Slovakia*, Judgment of 12 July 2001, Application No. 29032/95.
- ECHR. *Gaweda v. Poland*, Judgment of 14 March 2002, Application No. 44599/98.
- ECHR. *Groppera Radio AG and Others v. Switzerland*, Judgment of 28 March 1990, Application No. 10890/84.
- ECHR. *Gündüz vs. Turkey*, Judgment of 4 December 2003, Application No. 35071/97.
- ECHR. *Informationsverein Lentia and Others v. Austria*, Judgment of 24 November 1993, Application No. 13914/88; 15041/89; 15717/89; 15779/89; 17207/90.
- ECHR. *Klein v. Slovakia*, Judgment 31 October 2006, Application No. 72208/01.
- ECHR. *Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. France*, Judgment of 22 October 2007, Applications Nos. 21279/02 and 36448/02.
- ECHR. *Maestri v. Italy*, Judgment of 17 February 2004, Application No. 39748/98.
- ECHR. *Marônek v. Slovakia*, Judgment 19 April 2001, Application No. 32686/96.
- ECHR. *Meltex LDT and Mesrop Movsesyan v. Armenia*, Judgment of 17 June 2008, Application No. 32283/04.

- ECHR. *Müller and Others v. Switzerland*, Judgment of 24 May 1998. Application No. 10737/84.
- ECHR. *Murphy v. Ireland*, Judgment of 10 July 2003, Application No. 44179/98.
- ECHR. *Nilsen and Johnsen v. Norway*, Judgment of 25 November 1999, Application No. 23118/93.
- ECHR. *Pedersen and Baadsgaard v. Denmark*, 17 December 2004, Application No. 49017/99.
- ECHR. *Radio France and Others v. France*, Judgment of 30 March 2004, Application no. 53984/00.
- ECHR. *Roemen and Schmit v. Luxembourg*, Judgment of 25 February 2003, Application No. 51772/99.
- ECHR. *Selistö v. Finland*, Judgment 16 November 2004, Application No. 56767/00.
- ECHR. *Steel and Morris v. The United Kingdom*, Judgment of 15 February 2005, Application No. 68416/01.
- ECHR. *Sürek and Özdemir v. Turkey*, Judgment of 8 July 1999. Applications Nos. 23927/94 and 24277/94.
- ECHR. *Tammer v. Estonia*, Judgment 6 February 2001, Application No. 41205/98.
- ECHR. *Thoma v. Luxembourg*, Judgment of 29 March 2001, Application No. 38432/97.
- ECHR. *Ukrainian Media Group v. Ukraine*, Judgment 29 March 2005, Application No. 72713/01.

- ECHR. *Unabhängige Initiative Informationsvielfalt v. Austria*, Judgment of 26 February 2002, Application No. 28525/95.
- ECHR. *Vatan v. Russia*, Judgment of 7 October 2004, Application No. 47978/99.
- ECHR. *Zaoui v. Switzerland*, Judgment of 18 January 2001, Application No. 41615/98.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

- CIDH. Informe 10/91, *Caso 10.169, Banco de Lima (Perú)*, 22 de febrero de 1991.
- CIDH. Informe 106/99, *Bendeck-Cohdinsa (Honduras)*, 27 de septiembre de 1999.
- CIDH. Informe 103/99, *Bernard Merens y Familia (Argentina)*, 27 de septiembre de 1999.
- CIDH. Informe 8/98, Caso 11.671, *Carlos García Saccone (Argentina)*, 2 de marzo de 1998.
- CIDH. Informe 92/03, *Petición 453-01, Elías Santana y otros (Venezuela)*, 23 de octubre de 2003.
- CIDH. Informe 40/05, *Petición 12.139, José Luis Forzanni Ballardó (Perú)*, 9 de marzo de 2005.
- CIDH. Informe 39/99, *Petición, Mevopal, S.A. (Argentina)*, 11 de marzo de 1999.

- CIDH. Informe 88/03, *Petición 11.533*, Parque Natural Metropolitano (Panamá), 22 de octubre de 2003.
- CIDH. Informe 20/99, *Caso 11.317, Rodolfo Robles Espinoza e Hijos (Perú)*, 23 de febrero de 1999.
- CIDH. Informe 47/97, *Tabacalera Boquerón S.A. (Paraguay)*, 16 de octubre de 1997.
- CIDH. Informe N° 67/01, *Caso 11.859, Tomás Enrique Carvallo Quintana (Argentina)*, 14 de junio de 2001.

Corte Internacional de Justicia

- ICJ. *Barcelona Traction Light and Power Company Ltd.* Judgment of 5 February 1970.

CASOS NACIONALES

- Corte Constitucional de Colombia. *Sentencia T-472/09*. Expediente T-2234101. 16 de julio de 2009.

OTROS DOCUMENTOS

Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales

- ONU. CESCR. *General Comment No. 21: Right of everyone to take part in cultural life (art. 15, para. 1 (a), of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*. E/C.12/GC/21. 21 December 2009.

Declaraciones Conjuntas de los Relatores para la Libertad de Expresión

- CIDH. *Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Declaración Conjunta 2001 sobre Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo.*
- CIDH. *Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Declaración Conjunta 2007 sobre Diversidad en la Radiodifusión.*
- CIDH. *Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Declaración Conjunta 2010 del Décimo Aniversario: Diez Desafíos para la Libertad de Expresión en la Próxima Década.*
- CIDH. *Relatoría para la Libertad de Expresión. Informe Anual 2008.* 25 de febrero 2009. OEA/Ser.L/V/II.134.

Otros Documentos

- AMARC, *Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria*, 2009.
- ONU. *Document A/5000 of the sixteenth session of the United Nations General Assembly*, 5 December 1961.

III. HECHOS

1. La República de Chirilagua ha ratificado todos los tratados de derechos humanos del SIDH y de la ONU. En 2008 se llevó a cabo una consulta popular denominada “Papeleta de la Democracia”, en la que los ciudadanos podían manifestar su voluntad de que el presidente Atilio Escalante Norris pudiera reelegirse. En oposición a la consulta, se promovió una marcha denominada “Facebookazo”, la cual fue promovida a través de Radical Radio y de Radio Su-Versión. A raíz de lo anterior se generó un clima de tensión y polarización política, que alcanzó su clímax el 3 de marzo de 2008, día de la marcha en donde ocurrieron enfrentamientos. El más notorio de ellos se llevó a cabo en San Pedro de los Aguados, en donde hubieron 6 muertos y 15 heridos. El 10 de marzo de 2008 día de la elección, volvieron a suscitarse hechos violentos.

2. Radical Radio fue fundada por Byron Dayle y Maria Luisa Peroni, quién era la titular de la concesión. En el año 2000 murió y su hija Melanie Pereira Peroni, la sucedió en los roles de accionista y directora de la emisora. En el 2001, Melanie Pereira acudió a la COFERETEL para solicitar el cambio de nombre de la emisora y el cambio del titular de la concesión. La COFERETEL le advirtió que existían diversas irregularidades. Posteriormente, no fue respondida otra comunicación buscando aclaración sobre dichas irregularidades. Un locutor, llamado William Garra, creó un personaje llamado “Fatilio Escalante” caricaturizando al presidente, quien en el programa era constantemente ridiculizado y señalado como un “señorito feudal, bueno para nada, insensible, voraz y corrupto”. Radio Su-Versión, fue formada por ACOSINTI, una organización social formada por comunidades de San Pedro de los Aguados. Solicitó una licencia en dos ocasiones sin éxito, tras lo cual decidió establecer una estación de radio sin licencia, a cuyo cargo se encontraba Francis Hoffman. Parte de su programación consistía en retransmisiones de Radical Radio.

3. El 5 de marzo de 2008, la COFERETEL inició una revisión de las concesiones de radio, como resultado se dispuso el cierre de 40 estaciones que no cumplían con los requisitos de la LOT, como es el caso de Radical Radio por el incumplimiento del art. 92 de la LOT. También se ordenó el cierre de todas las radios ilegales conocidas en el país, por lo que el 19 de abril de 2008 se incautaron los equipos con los que operaba Radio Su-Versión. La LOT establece la concesión de licencias de manera tripartita entre medios priva-

dos, públicos y comunitarios. En Enero de 2010 se hizo una convocatoria para otorgar licencias y ninguna de las radios del caso participó.

4. El 10 de abril de 2008, Byron Dayle en su calidad de representante legal, presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo combatiendo la decisión de la COFERETEL. Dicho recurso se encuentra pendiente. El 30 de abril de 2008 se presentó acción de constitucionalidad para pedir la protección de diversos derechos de Radical Radio, la cual fue denegada en virtud de la legalidad de las actuaciones de la autoridad. Esta resolución fue apelada y confirmada en sus términos el 2 de junio de 2008. Por su parte Francis Hoffman también interpuso acción de constitucionalidad, buscando se protegieran los derechos de ACO-SINTI y de sus afiliados, la cual fue denegada y confirmada en apelación el 15 de junio de 2008.

5. Asimismo, el MP realizó acusaciones penales en contra de las presuntas víctimas por diversos delitos. Los Tribunales Penales condenaron a Melanie Pereira y a Francis Hoffman por el delito de “Hurto de Bienes del Estado” a 2 años de prisión o una multa de \$200.000 dólares. También fueron condenados por los delitos de “Instigación a delinquir” y “Difamación” a 6 meses de prisión o \$15.000 dólares. Dichas sentencias fueron confirmadas por el Tribunal de Apelaciones el 1 de octubre de 2008. Por su parte William Garra, fue condenado por los delitos de “Instigación a delinquir”, “Difamación” y “Homicidio” a 12 años de prisión. Su sentencia fue apelada, y confirmada el 1 de diciembre de 2008.

6. El 2 de diciembre fue presentada la petición ante la CIDH, aduciendo violaciones en perjuicio de Radical Radio, Radio Su-Versión, Melanie Pereira, Francis Hoffman, Byron Dayle y William Garra. La CIDH declaró admisible el caso respecto de violaciones a los arts. 8, 13 y 25 de la CADH en perjuicio de las personas naturales contenidas en la petición. El 25 de diciembre de 2009 sometió el caso a la Corte IDH.

IV. ASPECTOS PRELIMINARES DE ADMISIBILIDAD Y COMPETENCIA

7. Con fundamento en los artículos 41 y 42 del Reglamento vigente de la Corte IDH¹, el Estado comparece ante este Tribunal con el objeto de oponer excepciones preliminares de incompetencia de la Corte. Las

¹ Corte IDH. *Reglamento de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, aprobado en el LXXV período ordinario de sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009.*

excepciones preliminares deben interponerse en las primeras etapas del procedimiento,² y su propósito es plantear una cuestión previa a la decisión sobre el fondo e impedir que el Tribunal pueda pronunciarse sobre los méritos de la controversia.³ Por lo anterior el Estado presenta las dos excepciones preliminares siguientes:

1. Incompetencia de la Corte *Rationae Personae*

8. Los representantes de las presuntas víctimas alegan en el ESAP, que esta Corte debe considerar como víctima a Radical Radio y a Radio Su-Versión. Por su parte, la CIDH ha señalado que Melanie Pereira y Byron Dayle han sido víctimas de supuestas violaciones a la Convención como resultado de la cancelación de la concesión con la que operaba Radical Radio, así como la supuesta denegación de justicia emanada de la ineffectividad de los recursos internos. Además, ha señalado que Francis Hoffman ha sido víctima de violaciones producto del cierre de Radio Su-Versión, la confiscación de sus equipos y la supuesta denegación de justicia.

9. En primer lugar, es necesario recordar que, de conformidad con el artículo 1.1 de la CADH, los Estados se comprometen a respetar y garantizar los derechos y libertades de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.⁴ En este sentido debemos entender por presunta víctima a “la persona de la cual se alega han sido violados los derechos protegidos en la CADH”⁵. Asimismo, la Corte EDH ha señalado que sólo podrá considerarse víctima a la persona que directamente se vea afectada por el acto u omisión que se considera una violación a los derechos humanos⁶. Para efectos de las consideraciones anteriores, el artículo 1.2 de la CADH establece claramente que “persona es todo ser humano”. De conformidad con lo anterior, resulta

² Cfr. Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de Junio de 1987, Serie C No. 1, párr. 88; *Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay*. Sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C No. 146, párr. 100; y *Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú*, Sentencia de 25 de Noviembre de 2005, Serie C No. 137, párr. 49.

³ Cfr. Faundéz Ledesma, Héctor, *El sistema interamericano de protección de los derechos humanos*, 3ª. ed., San José, C.R, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004, p. 633.

⁴ Cfr. CIDH, Informe Nº 67/01, Caso 11.859, *Tomás Enrique Carvallo Quintana* (Argentina), 14 de junio de 2001, párr. 55.

⁵ *Reglamento de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos*, supra nota 1, Artículo 2.

⁶ Cfr. ECHR. *Vatan v. Russia*, Judgment of 7 October 2004, Application No. 47978/99, para. 48; y *Eckle v. Germany*, Judgment of 15 July 1982, Application no. 8130/78, Series A no. 51, para. 66.

evidente que la protección de la Corte necesariamente recae sobre personas físicas o naturales.⁷ Además de lo anterior, la Corte Interamericana ha establecido que las presuntas víctimas deben estar señaladas en la demanda y en el informe de la CIDH con fundamento en el art. 50 de la CADH; y que de conformidad con el art. 33.1 del Reglamento, corresponde a la CIDH y no a la Corte, identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas.⁸ Por lo tanto, podemos concluir que para que la Corte tenga competencia *rationae personae*, es necesario que en el caso que se somete a su consideración se aleguen violaciones a la esfera jurídica de un ser humano y que éste haya sido identificado como víctima en la debida oportunidad procesal.

Respecto de Radical Radio y Radio Su-Versión como víctimas

10. Tanto la CIDH,⁹ como la Corte,¹⁰ han reconocido que no tienen competencia para conocer sobre violaciones a personas jurídicas. La CIDH ha señalado que la CADH otorga su protección a las personas físicas o naturales, excluyendo de su ámbito de aplicación a las personas jurídicas o ideales, por cuanto éstas son ficciones jurídicas sin existencia real en el orden material.¹¹ Con base en los criterios anteriormente señalados es claramente improcedente la pretensión de los representantes de considerar a Radical Radio como presunta víctima en el presente caso, ya que se trata de una persona jurídica sobre la cual esta Corte no tiene competencia. Asimismo, la Corte tampoco puede considerar a Radio Su-Versión como víctima, ya que no se encuentra acreditado que tiene personalidad jurídica independiente, al ser una estación de radio cuyo control operativo y financiero es llevado a cabo por ACOSINTI. En cualquier caso, la Corte no tiene com-

⁷ Cfr. CIDH. Informe 106/99, *Bendeck-Cohdinsa* (Honduras), 27 de septiembre de 1999, párr. 17; Informe 40/05, Petición 12.139, *José Luis Forzanni Ballard* (Perú), 9 de marzo de 2005, párr. 35; e Informe 39/99, Petición, *Mevopal, S.A.* (Argentina), 11 de marzo de 1999, párr. 17.

⁸ Cfr. Corte IDH. *Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 29; *Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela*. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 22; y *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Itú Vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 224.

⁹ Cfr. CIDH. *Tomás Enrique Carvallo Quintana* (Argentina), *supra* nota 4, párr. 55; Informe 103/99, *Bernard Merens y Familia* (Argentina), 27 de septiembre de 1999, párr. 15; *Mevopal, S.A.* (Argentina), *supra* nota 7, párr. 20; y *Bendeck-Cohdinsa* (Honduras), *supra* nota 7, párr. 17.

¹⁰ Cfr. Corte IDH. *Caso Cantos Vs. Argentina*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85, párr. 22; y *Caso Perozo y otros Vs. Venezuela*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 399.

¹¹ Cfr. CIDH. *Bendeck-Cohdinsa* (Honduras), *supra* nota 7, párr. 17; y *Mevopal, S.A.* (Argentina), *supra* nota 7, párr. 17.

petencia para conocer de ninguna de ellas.

Respecto de Melanie Pereira, Byron Dayle y Francis Hoffman como víctimas

11. Por su parte Melanie Pereira y Byron Dayle no pueden ser consideradas como víctimas de violaciones como consecuencia de la cancelación de la concesión para explotar el espectro electromagnético, pues en todo caso, el derecho de concesión fue otorgado en favor de la Sra. María Luisa Peroni, el cual jamás fue transmitido, ya que ella nunca realizó los trámites necesarios para efectuar la sustitución de concesionario antes de su muerte. Ni Melanie Pereira, ni Francis Hoffman tuvieron la titularidad de dichos derechos, por lo que resulta inconsecuente pretender que se hayan vulnerado los derechos de una persona sin que haya sido previamente titular de los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, la cancelación de la concesión, en todo caso afectaría la esfera jurídica de Radical Radio, persona jurídica sobre la cual esta Corte está impedida de conocer.

12. No puede alegarse que Melanie Pereira, por su carácter de directora, accionista y representante legal de Radical Radio, pueda ser considerada como víctima en este caso, ya que si bien la Corte IDH y la CIDH han señalado que un individuo puede acudir al SIDH para hacer valer sus derechos aún cuando los mismos están cubiertos por una figura o ficción jurídica,¹² lo cual sólo es aplicable bajo determinados supuestos.

13. En particular, la Corte IDH y la CIDH han considerado dicho criterio en casos en donde existe un perjuicio patrimonial a una empresa. La CIDH ha señalado que “la inversión de un accionista en los activos de capital de una empresa integra la propiedad de esa persona física, y en principio es susceptible de valoración y protección en el marco de la CADH”,¹³ además ha recogido el criterio de la CIJ en el Caso Barcelona Traction,¹⁴ respecto de que si bien existe una distinción entre los derechos de un accionista y los de una empresa, el derecho interno otorga ciertos derechos directos, particularmente patrimoniales a los accionistas. Sin embargo, no es posible establecer que dicho criterio sea aplicable a Melanie Pereira, ya que el pre-

¹² Cfr. Corte IDH. *Caso Cantos Vs. Argentina*. *supra* nota 10, párr. 29; y *Caso Perozo y otros Vs. Venezuela*. *supra* nota 10, párr. 399.

¹³ CIDH. *Tomás Enrique Carvallo Quintana* (Argentina), *supra* nota 4, párr. 56.

¹⁴ Cfr. ICJ, *Barcelona Traction Light and Power Company Ltd*. Judgment of 5 February 1970. p. 36 para. 47.

sente caso no trata de supuestas violaciones patrimoniales, sino de supuestas violaciones a derechos sobre los cuales no puede colegirse que se traduzcan en una afectación a su esfera jurídica. Como la CIDH ha señalado los accionistas no pueden considerarse víctimas de actos de interferencia con los derechos de una empresa, a menos que prueben que sus derechos se han visto afectados directamente”.¹⁵ No puede pretenderse que la clara distinción entre persona natural y persona jurídica cese tan solo al momento de invocarse la protección de la CADH.¹⁶

14. Por otro lado, también ha sido establecido que son inadmisibles aquellas peticiones donde el agotamiento de los recursos internos fue realizado por las personas jurídicas y no por las personas naturales que dirigen,¹⁷ forman parte,¹⁸ o son representantes¹⁹ de las mismas.²⁰ La Corte EDH señaló en un caso similar al presente que “una persona no puede alegar una violación a sus derechos en procedimientos en los que no fue parte, incluso si es accionista y/o directora de la compañía que sí fue parte en los procedimientos.”²¹ De los hechos se desprende que la demanda interpuesta ante el Tribunal Administrativo y la acción de constitucionalidad incoada se interpusieron en nombre y representación de Radical Radio, por lo tanto, Byron Dayle y Melanie Pereira, no fueron personalmente parte. Al respecto la CIDH ha señalado que “el representante legal de una "entidad" que presenta una comunicación o petición, se confunde con dicho ente en virtud de su mandato y no puede considerarse en sí mismo (...) como víctima”.²² Por lo tanto, en virtud de que no ha sido acreditado que alguna persona física o natural haya agotado los recursos de la jurisdicción

¹⁵ CIDH. *Tomás Enrique Carvallo Quintana* (Argentina), *supra* nota 4, párr. 54; e Informe 92/03, Petición 453-01, *Elías Santana y otros* (Venezuela), 23 de octubre de 2003, párr. 50.

¹⁶ Cfr. CIDH. *José Luis Forzanni Ballard* (Perú), *supra* nota 7, párr. 36.

¹⁷ *Idem*.

¹⁸ Cfr. CIDH. *Bendeck-Cohdinsa* (Honduras), *supra* nota 7; Informe 47/97, *Tabacalera Boquerón S.A.* (Paraguay), 16 de octubre de 1997; Informe 10/91, Caso 10.169, Banco de Lima (Perú), 22 de febrero de 1991; Informe 88/03, Petición 11.533, *Parque Natural Metropolitano* (Panamá), 22 de octubre de 2003; e Informe 92/03, Petición 453-01, *Elías Santana y otros* (Venezuela), *supra* nota 15.

¹⁹ Cfr. CIDH. *Mevopal, S.A.* (Argentina), *supra* nota 7; y *Tomás Enrique Carvallo Quintana* (Argentina), *supra* nota 4.

²⁰ Cfr. CIDH. *Bernard Merens y Familia* (Argentina), *supra* 9 nota , párr. 15; y *José Luis Forzanni Ballard* (Perú), *supra* nota 7, párr. 35.

²¹ Cfr. ECHR. *Meltex LDT and Mesrop Movsesyan v. Armenia*, Judgment of 17 June 2008, Application No. 32283/04, para. 66.

²² CIDH. *Mevopal, S.A.* (Argentina), *supra* nota 7, párr. 14.

interna, ni se haya presentado ante las autoridades nacionales como agraviado,²³ esta Corte debe declararse incompetente de conocer respecto de las supuestas violaciones cometidas en contra de Radical Radio.

15. Francis Hoffman tampoco puede ser considerado como víctima de las supuestas violaciones referentes a Radio Su-Versión, ya que el cierre de la misma no afecta la esfera jurídica del Sr. Hoffman. En todo caso afectaría a personas jurídicas sobre las cuales no tiene competencia este Tribunal. Por otro lado, como se desprende del trazado fáctico, el Estado confiscó los equipos con los que operaba Radio Su-Versión. Como la CIDH ha señalado reiteradamente, la propiedad es un derecho personal y los órganos del SIDH sólo tienen atribuciones para proteger los derechos de un individuo cuya propiedad es confiscada, pero no tienen jurisdicción sobre los derechos de personas jurídicas, tales como compañías, o en este caso, estaciones de radio.²⁴

16. Finalmente, como ha sido señalado anteriormente, resulta crucial determinar a nombre de quién se agotaron los recursos internos. La acción de constitucionalidad interpuesta por Francis Hoffman, en su calidad de representante legal, buscaba proteger los derechos de ACOSINTI y de sus afiliados individualmente considerados. En el informe derivado del art. 50 de la CADH, no se identificó a ninguna persona que haya acreditado ser socia de ACOSINTI, y como ha sido establecido, la Corte no es competente de conocer de violaciones que se hubieran cometido en agravio de una persona jurídica. Como la CIDH y la Corte han señalado en el caso Herrera Ulloa, tampoco es procedente que se considere al representante legal de una persona jurídica como víctima, pues se confunde con dicho ente en virtud de su mandato y no puede considerarse en sí mismo como tal. Por lo anterior la Corte no es competente de conocer *rationae personae* de las violaciones alegadas.

2. Excepción Preliminar de Falta de Agotamiento de los Recursos Internos

17. La CADH, en su artículo 46.1, establece que para que una petición o comunicación sea admisible, es

²³ Cfr. CIDH. *Mevopal, S.A.* (Argentina), *supra* nota 7, párr. 19; Bendeck-Cohdinsa (Honduras), *supra* nota 7, párr. 19; y *José Luis Forzanni Ballardó* (Perú), *supra* nota 7, párr. 38.

²⁴ CIDH. *José Luis Forzanni Ballardó* (Perú), *supra* nota 7, párr. 38; e Informe 8/98, Caso 11.671, *Carlos García Saccone* (Argentina), 2 de marzo de 1998, párr. 28.

indispensable que previamente se hayan interpuesto y agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, de conformidad con los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos. Lo anterior en virtud del carácter subsidiario del SIDH. De acuerdo al Preámbulo de la Convención, la protección internacional es “de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados”. El carácter subsidiario del SIDH ha sido desarrollado por la jurisprudencia de esta Corte, la cual ha sostenido que “[l]a regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción internacional de los derechos humanos, por ser ésta "coadyuvante o complementaria" de la interna.”²⁵

18. Para la Corte, “la regla que exige el previo agotamiento de los recursos internos está concebida en interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la ocasión de remediarlos con sus propios medios.”²⁶ En el presente caso, se encuentra pendiente de resolución un recurso administrativo interpuesto por el señor Byron Dayle en su calidad de representante legal, en el que Radical Radio solicita que se declare la nulidad de la decisión administrativa que canceló la concesión con la que operaba tal estación, en su momento otorgada a la fallecida María Luisa Peroni. Dicha demanda fue admitida el 15 de agosto del mismo año por el Tribunal Administrativo y desde entonces se encuentra en la etapa de ofrecimiento y desahogo de pruebas.

19. El Estado es consciente de que el artículo 46.2 de la CADH establece excepciones a la regla del previo agotamiento de los recursos internos, y de que los representantes han alegado la actualización del supuesto previsto en el inciso c) de dicho artículo, alegando retardo injustificado. En este sentido “la Corte ha desarrollado pautas para analizar una excepción de incumplimiento de la regla del agotamiento de los recursos

²⁵ Cfr. Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*, *supra* nota 2, párr. 61; *Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 125 y, *Caso Gangaram Panday Vs. Suriname*, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de Diciembre de 1991. Serie C No. 12, párr. 38.

²⁶ Corte IDH, *Asunto Viviana Gallardo y otras*, 13 de Noviembre de 1981, Serie A No.10181 párr. 26.

internos.²⁷ Al efecto, es preciso analizar sus presupuestos formales y materiales, previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y en las disposiciones estatutarias y reglamentarias pertinentes de los órganos del SIDH.

20. En cuanto a los aspectos formales, deben verificarse las cuestiones propiamente procesales, tales como: el momento procesal en que la excepción ha sido planteada y los hechos respecto de los cuales se planteó.²⁸ Respecto de los presupuestos materiales, se debe observar “si el Estado que presenta esta excepción ha especificado los recursos internos que aún no se han agotado, y será preciso demostrar que estos recursos se encontraban disponibles y eran adecuados, idóneos y efectivos”²⁹.

21. En el caso *subjudice* el Estado interpuso la excepción en el momento procesal oportuno, es decir en la primera comunicación ante la CIDH.³⁰ Asimismo, el recurso administrativo era un recurso adecuado y efectivo para combatir la decisión administrativa de la COFERETEL. En este sentido no puede alegarse que existió un retardo injustificado, ya que para determinar si éste existe en la sustanciación de un recurso, es necesario observar si el plazo transcurrido es un plazo razonable en los términos del artículo 8.1 de la CADH. La Corte ha señalado que para la determinación relativa al “plazo razonable” es necesario atender a la 1) complejidad del asunto, 2) la actividad procesal del interesado, 3) la conducta de las autoridades judiciales³¹ y 4) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la per-

²⁷ Cfr. Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. *supra* nota 2, párr. 88; *Caso Nogueira de Carvalho y otros Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 51; y *Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 64.

²⁸ Cfr. Corte IDH. *Caso Ríos y otros Vs. Venezuela*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 37; *Caso Escher y otros Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 28; y *Caso Garibaldi Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 46.

²⁹ Cfr. Corte IDH. *Caso Usón Ramírez vs Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009, Serie C No. 207, párr. 19; *Caso Garibaldi vs Brasil*. *supra* nota 28, párr. 46; y *Caso Escher y Otros vs Brasil*. *supra* nota 28, párr. 28.

³⁰ Cfr. Corte IDH. *Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Septiembre de 2009. Serie C No. 204, párr. 20; y *Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela*. *supra* nota 29, párr. 19.

³¹ Cfr. Corte IDH. *Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 77; *Caso Garibaldi Vs. Brasil*. *supra* nota 28, párr. 133; y *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 112.

sona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia³².

22. Al respecto, es necesario señalar que en la sustanciación del recurso contencioso administrativo se ha procedido, con la admisión de la demanda, la fijación en lista, el término de contestación, y actualmente el procedimiento se encuentra en la etapa de pruebas, quedando pendiente la conciliación judicial, el traslado a las partes para alegatos finales y la emisión de la sentencia. Cabe señalar que los tiempos del procedimiento se encuentran dentro de los previstos en la legislación interna de Chirilagua y en todo caso el Estado considera que no puede considerarse que el transcurso de 2 años sea un plazo irrazonable para desahogar un asunto de naturaleza compleja como el presente; por lo tanto, el Estado sostiene que es necesario que se resuelva el recurso interno pendiente para efectos de que este Tribunal pueda tener competencia respecto del mismo.

V. ASPECTOS DEL FONDO DEL ASUNTO

1. Supuesta violación al art. 13 en conexión con el artículo 1.1 de la CADH derivada de la cancelación de la concesión con la que operaba Radical Radio.

23. La presunta víctima alega que las actuaciones administrativas llevadas a cabo por el Estado de Chirilagua a través de las cuales canceló la concesión de uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, vulneraron el art. 13 de la CADH. La libertad de expresión es piedra angular de una sociedad democrática,³³ y por tanto se deben minimizar las restricciones a la información y equilibrar, en la mayor medida posible, la participación de las distintas corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo.³⁴ Sin embargo, la Corte IDH ha señalado que éste no es un derecho absoluto y puede estar sujeto a restricció-

³² Cfr. Corte IDH. *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 155; *Caso Kawas Fernández Vs. Honduras*. *supra* nota 31, párr. 115; y *Caso Garibaldi Vs. Brasil*. *supra* nota 28, párr. 138.

³³ Cfr. Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 70; *Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 131; y *Caso Kimel Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 17, párrs. 87 y 88.

³⁴ Cfr. Corte IDH. *Caso Perozo y otros Vs. Venezuela*. *supra* nota 10, párr. 117.

nes³⁵, en particular cuando interfiere con otros derechos garantizados por la Convención³⁶. Dichas restricciones deben cumplir con el test tripartito, es decir, (i) estar previstas en ley; (ii) perseguir un fin legítimo, y (iii) cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, de manera que sean necesarias en una sociedad democrática³⁷. Dicho criterio ha sido aplicado por la Corte EDH en casos relativos a permisos de radiodifusión.³⁸

24. Respecto de la previsión en la ley, la cancelación de la concesión se fundamenta en el art. 27 de la CC y en el art. 92 de la LOT. Dichas normas son accesibles a las personas a las que van dirigidas y están formuladas con la suficiente precisión para permitirles prever las consecuencias que una acción determinada puede causar.³⁹

25. Por otro lado, la Corte EDH ha manifestado, que los Estados tienen permitido regular mediante un sistema de licencias o concesiones, la manera en la que se regulan las telecomunicaciones en su territorio.⁴⁰

Por lo tanto, la medida aplicada por la COFERETEL persigue el fin legítimo del mantenimiento del orden público. Si bien la CADH y el PIDCP no establecen, como el art. 10.1 del CEDH una disposición en donde de manera explícita se permite el establecimiento de un sistema de licencias para la radiodifusión. De los trabajos preparatorios del PIDCP se desprende la voluntad de las partes de considerar que el concepto de “orden público” contiene dicha autorización⁴¹, por lo que también se cumple con el requisito de persecución de un fin legítimo.

³⁵ Cfr. Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 120; *Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela*. *supra* nota 33, párr. 131; *Caso Kimel Vs. Argentina*. *supra* nota 33, párr. 54; *Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 11,1, párr. 95; y *Caso Palamara Iribarne Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 79.

³⁶ Cfr. Corte IDH. *Caso Kimel Vs. Argentina*. *supra* nota 33, párr. 56; y *Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela*. *supra* nota 33, párr. 131.

³⁷ Cfr. Corte IDH *Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica*. *supra* nota 35, párr. 120.

³⁸ Cfr. ECHR. *Gaweda v. Poland*, Judgment of 14 March 2002, Application No. 44599/98, para. 47; *Murphy v. Ireland*, Judgment of 10 July 2003, Application No. 44179/98, para. 65; *Roemen and Schmit v. Luxembourg*, Judgment of 25 February 2003, Application No. 51772/99, para. 46; y *ABC v. Austria*, Judgment of 20 October 1997, Application No. 109/1996/728/925, para. 28.

³⁹ Cfr. ECHR. *Meltex LTD and Mesrop Movsesyan v. Armenia*, *supra* nota 21, para. 80; y *Maestri v. Italy*, Judgment of 17 February 2004, Application No. 39748/98, para. 30.

⁴⁰ Cfr. ECHR. *Groppera Radio AG and Others v. Switzerland*, Judgment of 28 March 1990, Application No. 10890/84, para. 61; y *Informationsverein Lentia and Others v. Austria*, Judgment of 24 November 1993, Application No. 13914/88; 15041/89; 15717/89; 15779/89; 17207/90, para. 32.

⁴¹ ONU. *Document A/5000 of the sixteenth session of the United Nations General Assembly*, 5 December 1961, para. 23.

26. Asimismo, para determinar si una medida puede considerarse necesaria en una sociedad democrática es necesario valorar si la misma satisface una necesidad social imperiosa, esto es, (i) si está orientada a satisfacer un interés público imperativo; (ii) si restringe en menor grado el derecho protegido; y (iii) si se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo.⁴² En cuanto al primero de éstos requisitos, el Estado entiende que las leyes administrativas deben estar orientadas a garantizar las necesidades de la colectividad, pues la función administrativa tiene como finalidad la satisfacción de dichas necesidades de forma inmediata, continua, concreta y espontánea, lo cual sólo se consigue en la medida en que dichas leyes estén orientadas a la consecución de tal finalidad⁴³. En este sentido, Chirilagua se encuentra en plena aptitud para establecer planes y programas para la consecución de sus fines, con miras a garantizar el orden público y fomentar el interés social, mediante la instauración de estructuras normativas y la ejecución de actos administrativos concretos.⁴⁴

27. Ahora bien, la autonomía en el derecho de las telecomunicaciones encuentra su fundamento en la regulación que debe hacer el Estado sobre la difusión, producción y recepción de información de cualquier naturaleza que sea transmitida por cualquier medio electromagnético;⁴⁵ así como establecer las condiciones a través de las cuales se regula un servicio público. Por lo tanto, puesto que la radiodifusión es el resultado de la emisión de una señal que se propaga por el espectro radioeléctrico, un bien de dominio público, corresponde a la autoridad administrativa la regulación del mismo.⁴⁶

28. De esta forma, del art. 92 de la LOT se desprende que el Estado puede otorgar el uso del espectro radioeléctrico a través de una concesión administrativa, definida como el “acto que confiere derechos personalísimos a un individuo o persona moral de solvencia probada, por virtud del cual el Estado le permite

⁴² Cfr. Corte IDH. *Caso Castañeda Gutman Vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 186.

⁴³ Delgadillo, Luis Humberto, *Elementos de Derecho Administrativo*, Ed., Limusa, Noriega Editores, México, Primer Curso, p. 70.

⁴⁴ *Idem*, p. 35.

⁴⁵ González Luna Bueno, Federico, Soria Gutiérrez, Gerardo, y Tejado Donde, Javier, *La Regulación de las Telecomunicaciones*, Ed., Miguel Ángel Porrúa, México, 2007, p. 91.

⁴⁶ *Idem*, p. 108.

llevar a cabo actividades de interés general que originariamente le correspondería a dicho ente”.⁴⁷ Estas concesiones, como todo acto administrativo, pueden concluir por diversas causas como caducidad, quiebra, muerte del titular, revocación y vencimiento del plazo.⁴⁸

29. En el presente caso, Radical Radio operaba con una concesión que se había otorgado a la Sra. María Luisa Peroni, quien falleció en el año 2000, por lo tanto, en virtud de que se actualizó uno de los supuestos de extinción del acto jurídico, dicha concesión se agotó de manera natural. Es importante mencionar que el art. 92, permite la sustitución de la titularidad de la concesión por la persona que el titular original indique, siempre que ésta cumpla con las condiciones y principios establecidos en la ley. A pesar de tener dicha posibilidad, María Luisa Peroni en ningún momento inició el trámite para la sustitución del titular de la concesión, por lo que la cancelación de dicho título estaba justificada.

30. Lo anterior, de ninguna manera resulta un impedimento para que Radical Radio, o cualquier otra persona participe en las convocatorias para otorgar licencias de uso y explotación del espectro electromagnético; en la más reciente de ellas, llevada a cabo en Enero de 2010, Radical Radio no participó, sin embargo es importante refrendar el compromiso del Estado por establecer una política para garantizar el pluralismo informativo. Por esa razón, el Estado modificó el art. 94 de la LOT estableciendo criterios democráticos en la asignación de frecuencias.⁴⁹ Por todo lo anterior, el Estado considera que la cancelación de la concesión era necesaria en una sociedad democrática puesto que responde a una necesidad social y es proporcional con el fin legítimo y por lo tanto no es violatoria del art. 13 de la CADH.

2. Supuesta violación del art. 13 en conexión con art. 1.1 de la CADH derivada del cierre de Radio Su-Versión.

31. El art. 13 de la CADH comprende además de lo apuntado anteriormente “el derecho a utilizar cualquier

⁴⁷ *Idem*, p. 147.

⁴⁸ Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto y Lucero Espinoza, Manuel, *Compendio de Derecho Administrativo*, Ed., Porrúa, México, 2005, Primer curso, p. 39.

⁴⁹ CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. *Declaración Conjunta 2001 sobre Desafíos a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo; Declaración Conjunta 2007 sobre Diversidad en la Radiodifusión; y Declaración Conjunta 2010 del Décimo Aniversario: Diez Desafíos para la Libertad de Expresión en la Próxima Década.*

medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios”.⁵⁰ En este sentido, una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.⁵¹ Sin embargo, como ya ha sido señalado, el derecho a la libertad de expresión admite restricciones que deben cumplir con los requisitos del test tripartito desarrollado anteriormente (*supra* párr. 23). En este sentido, el cierre de Radio Su-Versión cumplió con los requisitos convencionales.

32. En primer lugar, dicha medida encuentra fundamento en el art. 92 de la LOT reglamentario del art. 27 de la CC, que cual establece que “el Estado administrará el espectro radioeléctrico teniendo en cuenta criterios de equidad y atendiendo al principio de igualdad de oportunidades y al pluralismo informativo”.

33. Por otro lado, la medida ordenada por la COFERETEL tiene como objetivo preservar el orden público, definido como “las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios”, el cual es uno de los fines legítimos por medio de los cuales pueden justificarse restricciones al ejercicio de ciertos derechos y libertades.⁵²

34. Asimismo, la Corte ha establecido que para que una medida sea necesaria en una sociedad democrática, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica, ajustarse estrechamente al logro de un fin legítimo⁵³ y ser de una necesidad tal que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos restrictivo.⁵⁴

35. En este sentido, ya ha sido establecido que resulta perfectamente legítimo el establecimiento de un sistema de licencias y la exigencia de requisitos para la explotación del espectro electromagnético. En el presente caso, se hizo una revisión de concesiones con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el

⁵⁰ Corte IDH. *La Colegiación Obligatoria de Periodistas*, *supra* nota 33 párr. 30; *Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 65; y *Caso Palamará Iribarne Vs. Chile*. *supra* nota 35, párr. 73.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² *Cfr.* Corte IDH. *La Colegiación Obligatoria de Periodistas*, *supra* nota 33, párr. 64.

⁵³ Corte IDH. *La Colegiación Obligatoria de Periodistas* (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 46; *Cfr.* ECHR, *Case of The Sunday Times v. United Kingdom*, Judgment of 26 April 1979, Application no. 6538/74 para. 59; y *Case of Barthold v. Germany*, Judgment of 31 January 1986, Application no. 8734/79, para. 59.

⁵⁴ *Cfr.* Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*. *supra* nota 35, párr. 101.1 c).

acceso al espectro electromagnético y el pluralismo informativo. La COFERETEL solicitó a las cadenas de radio y televisión que tenían una concesión del Estado, datos y requisitos, lo que produjo el cierre de 40 estaciones de radio, dentro de las cuales se encontraba Radio Su-Versión. El cierre de dicha estación estaba justificado, ya que no contaba con una concesión para explotar el espectro electromagnético. De no tomar medidas adecuadas, se pondría en riesgo el Estado de Derecho, el cual ha sido enfatizado por la Corte como indispensable en una sociedad democrática, y necesario para asegurar la satisfacción del interés público, así como los derechos de los particulares⁵⁵. No es admisible el argumento de los representantes respecto de que el Estado ha vulnerado el principio de confianza legítima, ya que dicho principio encuentra su límite en el interés general,⁵⁶ en el cuál se basó la decisión.

36. Es importante mencionar que tanto ACOSINTI, como cualquier otra persona, está en posibilidades de participar en las convocatorias para el otorgamiento de licencias de radiodifusión comunitaria. Chirilagua cuenta con una de las legislaciones más avanzadas en la materia, ya que en aras de garantizar la pluralidad y la diversidad ha reconocido la figura de medios comunitarios en el art. 70 de la LOT, ha reservado 1/3 del espectro exclusivamente para los mismos y ha establecido en la LOT criterios de asignación democráticos y objetivos, de conformidad con el Principio 12 de la DPLE y con los estándares más recientes en la materia elaborados por organismos internacionales⁵⁷ y de la sociedad civil⁵⁸. En Enero de este año se realizó una nueva convocatoria, en la cual no participó ACOSINTI, sin embargo se planea otorgar 100 licencias para este tipo de medios, confirmando el compromiso del Estado con la libertad de expresión, en todas sus dimensiones.

3. Supuesta violación del art. 21 en conexión con el art. 1.1 de la CADH derivada de la confiscación de equipos de transmisión.

⁵⁵ Cfr. Corte IDH. *Caso Bulacio Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 13.

⁵⁶ Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-472/09. Expediente T-2234101.16 de julio de 2009. p. 4.2.

⁵⁷ Cfr. ONU. CESCR. *General Comment No. 21: Right of everyone to take part in cultural life* (art. 15, para. 1 (a), of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). E/C.12/GC/21. 21 December 2009 para. 52 (a). CIDH. Relatoría para la Libertad de Expresión, Declaraciones Conjuntas 2001, 2007 y 2010, supra nota 49.

⁵⁸ Cfr. AMARC, *Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria*, 2009.

37. Los representantes argumentan que el Estado violó la CADH, en cuanto a la confiscación de los equipos con los que operaba Radio Su-Versión. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto de propiedad que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona.⁵⁹ El derecho a la propiedad no es absoluto y, en ese sentido, puede ser objeto de restricciones y limitaciones,⁶⁰ siempre y cuando éstas se realicen por la vía legal adecuada y de conformidad con los parámetros establecidos en la CADH.⁶¹

38. En el presente caso, la confiscación de los equipos con los que operaba Radio Su-Versión cumplió con los parámetros descritos ya que en primer lugar, como consta en los hechos,⁶² dicha medida fue llevada a cabo por la autoridad competente y de conformidad con los procedimientos previstos en la ley. En segundo lugar, la medida está justificada, en tanto tuvo por objeto: i) evitar que los bienes continuaran siendo utilizados en actuaciones ilícitas, ii) procurar el éxito de la investigación penal, iii) garantizar las responsabilidades pecuniarias que podrían declararse como resultado del proceso, y iv) evitar la pérdida o deterioro de la evidencia. Esta Corte ha señalado en otros casos que medidas como la aplicada por Chirilagua no constituyen *per se* una violación del derecho de propiedad si se tiene en cuenta que no significa un traslado de la titularidad del derecho de dominio.⁶³ En este sentido, la disposición de los bienes no se efectuó en forma definitiva y restringió exclusivamente a su administración y conservación; y a los actos de investigación y manejo de evidencia respectivos.⁶⁴ Esta Corte en el Caso Chaparro Álvarez señaló que “la finalidad que cumplen estas medidas es acorde con la Convención Americana y su existencia no es contraria a lo consa-

⁵⁹ Cfr. Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 122; *Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198, párr. 84; y *Caso Salvador Chiriboga vs Ecuador*. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 55.

⁶⁰ Cfr. Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein vs. Perú*. *supra* nota 59, párr. 128; *Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú*. *supra* nota 59, párr. 84.

⁶¹ Cfr. Corte IDH. *Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador*. *supra* nota 59, párr. 54. *Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú*. *supra* nota 59, párr. 84.

⁶² Pregunta aclaratoria 2 de la página 7.

⁶³ Corte IDH. *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador*. *supra* nota , párr. 186.

⁶⁴ *Idem*, párr. 187.

grado en el art. 21”.⁶⁵ En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Europea en casos como *Zaoui v. Suiza*⁶⁶ y *Balsyte-Lideikiene v. Lituania*⁶⁷, en donde las medidas de confiscación fueron consideradas convencionales en virtud de los fines perseguidos, la necesidad y la proporcionalidad de la medida.

39. Por lo tanto, en virtud de que la medida de confiscación se encuentra debidamente justificada y cumple con los parámetros convencionales, esta Corte debe declarar la no violación del art. 21 de la CADH.

4. Supuesta violación del art. 24 en conexión con los arts. 1.1 y 2 de la CADH

40. El art. 24 de la CADH consagra el principio de la igualdad ante la ley. Al respecto la Corte ha señalado que existe un estrecho vínculo entre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, ya que “en función del reconocimiento de la igualdad ante la ley, se prohíbe todo tratamiento discriminatorio”.⁶⁸ En virtud de lo anterior, los Estados “deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de *jure* o de *facto*”.⁶⁹

41. La Corte ha señalado que por discriminación se refiere a “toda exclusión, restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable, que redunde en detrimento de los derechos humanos”.⁷⁰ También se debe considerar que no toda distinción de trato implica necesariamente que exista una ofensa, por sí misma, de la dignidad humana.⁷¹ La Corte EDH estableció que “sólo es discriminatoria una distinción cuando carece de justificación objetiva y razonable”.⁷² En el mismo sentido la Corte IDH ha reiterado que “no habrá

⁶⁵ *Idem*, párr. 189.

⁶⁶ Cfr. ECHR. *Zaoui v. Switzerland*, Judgment of 18 January 2001, Application No. 41615/98.

⁶⁷ Cfr. ECHR. *Balsyte-Lideikiene v. Lithuania*, Judgment of 4 November 2008, Application No. 72596/01.

⁶⁸ Cfr. Corte IDH. *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de Septiembre de 2003*. Serie A No. 18, párr. 101; y *Caso Yatama vs. Nicaragua*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Junio de 2005. Serie C No. 127, Párr. 7.

⁶⁹ Corte IDH. *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03*, *supra* nota 68, párr. 103.

⁷⁰ Corte IDH. *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03*, *supra* nota 68, párr. 84; y *Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de Enero de 1984*. Serie A No. 4, párr. 56.

⁷¹ Cfr. *Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización*; Opinión Consultiva OC-4/84, *supra* nota 70, párr. 56; *Condición jurídica y derechos humanos del niño*; Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 46; y *Caso Castañeda Gutman Vs. México*. *supra* nota 42, párr. 211.

⁷² Corte IDH. *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03* *supra* nota 68, párr. 89; y ECHR, *Case of Willis v. The United Kingdom*, Judgment of 11 June 2002, Application no. 36042/97, para. 39; *Case of Wessels-Bergervoet v. The Netherlands*, Judgment of 4th June 2002, Application no. 34462/97, para. 46; *Case of Petrovic v. Austria*, Judgment of 27th of March 1998, Application no. 156/1996/775/976, Reports 1998-II, para. 30; *Case "relating to certain*

discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente”.⁷³

42. El Estado niega categóricamente que las medidas adoptadas por el Estado fueron llevadas a cabo por motivos políticos o de cualquier otra índole. Por el contrario, el Estado actuó en estricta observancia de la ley. Como se desprende de los hechos, dichas medidas fueron aplicadas a toda estación de radio que presentó irregularidades, independientemente de su línea editorial. En este sentido, las medidas adoptadas por la COFERETEL, estuvieron justificadas por criterios objetivos y razonables, por tanto no existe violación al art. 24 de la CADH.

5. Supuesta violación del arts. 13 y 9 en conexión con el art. 1.1 de la CADH respecto de las sanciones penales.

43. Como la Corte IDH ha reconocido en otras ocasiones, ésta no tiene competencia para analizar si determinadas expresiones constituyen un delito conforme al derecho interno de un Estado.⁷⁴ En el mismo sentido la Corte EDH ha señalado que al ejercer su función supervisora en casos sobre responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión, no debe sustituir a las autoridades nacionales, sino que debe analizar, a la luz de las circunstancias del caso en su totalidad, si las razones aducidas por las autoridades nacionales fueron pertinentes y suficientes para justificarla.⁷⁵

Respecto de las condenas por el delito de “Hurto de bienes del Estado”

44. El art. 13 de la CADH no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir la información y hacerla llegar al mayor número de destinatarios”,⁷⁶ así como el derecho a conocer opiniones, relatos y noticias. En

aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium” v. Belgium, Judgment of 23rd July 1968, Application no. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64, Series A 1968, para. 10.

⁷³ Corte IDH. *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados*. Opinión Consultiva OC-18/03, *supra* nota 68, párr. 91.

⁷⁴ Corte IDH. *Caso Tristán Donoso Vs. Panamá*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, párr. 94; y *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*. *supra* nota 35, párr. 106.

⁷⁵ Cfr. ECHR. *Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway*, judgment of 20 May 1999, Application no. 21980/93, para. 60; *Selistö v. Finland*, judgment 16 November 2004, Application no. 56767/00, para. 49; *Marónek v. Slovakia*, judgment 19 April 2001, Application no. 32686/96, para. 53; y *Nilsen and Johnsen v. Norway*, judgment of 25 November 1999, Application no. 23118/93, para. 43.

⁷⁶ Corte IDH. *La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos)*. Opinión Consultiva OC-5/85, *supra* nota 33, párr. 31; *Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay*. *supra* nota 35, párr. 73 y 78.

el mismo sentido y como se estableció anteriormente, la regulación del espacio radioeléctrico, a través del otorgamiento de licencias y concesiones para la explotación del mismo, no solo es un derecho del Estado, sino que constituye un deber del mismo. Es en el ámbito de ese derecho y deber, que el Juzgado Criminal de Delitos Federales sentenció a Melanie Pereira y a Francis Hoffman por el delito hurto de bienes del estado. Dicha sanción cumplió con los requisitos de (i) estar prevista en ley; (ii) perseguir alguno de los fines legítimos previstos en la CADH, y (iii) ser necesaria en una sociedad democrática.

45. El CPC establece que “comete el delito de hurto de bienes del Estado quién se apodere de un bien público para su uso o provecho, o para el de un tercero.” Dicho tipo penal acota claramente la conducta punible, cumpliendo así con el principio de legalidad previsto por el art. 9 de la CADH.

46. Además, la condena de Melanie Pereira Peroni y Francis Hoffman pretende garantizar el orden público, fin considerado como legítimo tanto por la Corte, como por la CADH, según ya ha sido establecido anteriormente (supra párr. 25).

47. Por otro lado, el Estado considera que las condenas por el delito de hurto de bienes del Estado, constituyen una medida necesaria en una sociedad democrática, en virtud de que Radical Radio explotó el espectro electromagnético sin que mediara para ello licencia o concesión que tuviera validez, hecho sobre el cual Melanie Pereira tuvo conocimiento pleno, apropiándose así de bienes públicos ilegalmente y usufructuándolos para su propio beneficio. Asimismo, ACOSINTI, a sabiendas de que no contaba con concesión alguna para la explotación y usufructo del espectro electromagnético, en lugar de actuar dentro del marco de la ley e interponer los medios legales que se encontraban a su disposición, abrió ilegalmente y con pleno conocimiento de causa la estación de radio autodenominada Radio Su-Versión, bajo la dirección de Francis Hoffman.

48. Las personas morales no pueden ser sancionadas por el derecho penal, ya que las mismas no cuentan con voluntad propia, sino que sus actos dependen de la voluntad y de las decisiones de aquellas personas

físicas bajo cuyo cargo se encuentra la dirección y administración de las mismas.⁷⁷ Es en este sentido que fueron sentenciadas las presuntas víctimas, en virtud de que la dirección de las estaciones se encontraba a su cargo, por lo que correspondió a esas personas la decisión de apropiarse del espectro radioeléctrico. Dichas sanciones penales son idóneas, en virtud de que constituyen la medida más efectiva para sancionar los delitos patrimoniales.

49. Asimismo, la medida fue proporcional, en virtud de que el Juzgado, luego de haber tomado en consideración las circunstancias particulares de cada una de las presuntas víctimas, (i) es decir la gravedad de la ofensa, (ii) la duración de la actividad ilegal y el (iii) tipo de delito, las sentenció a la pena mínima prevista por el CPC, es decir, a 2 años de prisión,⁷⁸ con la opción de conmutar su pena privativa de la libertad, por una multa equivalente a \$200,000 USD, que corresponden a 80 salarios mínimos mensuales elevados al año. Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Criminal de Apelaciones por considerarla justa y proporcional. Es importante hacer mención de que Melanie Pereira hizo ejercicio de su derecho de conmutar la pena privativa de la libertad, por lo que en ningún momento estuvo prisión. Por todas las consideraciones plasmadas en los párrafos anteriores, el Estado considera que las penas impuestas a Melanie Pereira y Francis Hoffman no violan la CADH.

Respecto de las condenas por el delito de “Instigación a delinquir” y “homicidio”

50. El art. 13 de la CADH prohíbe a los Estados todo tipo de censura previa, ya sea de forma directa o a través de medios indirectos; sin embargo, el art. 13.2 de la CADH, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Dichas restricciones tienen carácter excepcional y no deben limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.⁷⁹

51. Asimismo, la Corte IDH ha establecido que para que dichas restricciones o responsabilidades ulteriores

⁷⁷ Pavón Vasconcelos, Francisco. *Derecho Penal Mexicano, Parte General*. 19na Edición, Ed. Porrúa, México 2006, pp. 200 -206.

⁷⁸ El CPC sanciona el delito de hurto de bienes del Estado con la pena de 2 a 6 años de prisión.

⁷⁹ Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*. *supra* nota 35, párr. 120; *Caso Palamara Iribarne Vs. Chile*. *supra* nota 35, párr. 79; y *Caso Tristán Donoso Vs. Panamá*. *supra* nota 74, párr. 110.

sean compatibles con la CADH, éstas deben cumplir con el test tripartito mencionado anteriormente (supra párr. 23). Al respecto ha señalado que al valorar una restricción o limitación a la libertad de expresión, “no debe sujetarse únicamente al estudio del acto en cuestión, sino que debe igualmente examinar dicho acto a la luz de los hechos del caso en su totalidad, incluyendo las circunstancias y el contexto en los que éstos se presentaron”⁸⁰.

52. El Estado considera que las sentencias condenatorias por el delito de “instigación a delinquir” en contra de Melanie Pereira y Francis Hoffman, así como la sentencia condenatoria en contra de William Garra por los delitos de “instigación a delinquir” y “homicidio”, no violan la CADH, en virtud de que cumplen con los requisitos establecidos por la CADH y por la Jurisprudencia de la Corte, como a continuación se demuestra.

53. La Corte ha señalado que para cumplir con el principio de legalidad previsto por el art. 9 de la CADH, los Estados, en la elaboración de los tipos penales, deben “utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal.”⁸¹ Asimismo, la Corte EDH ha establecido que para determinar si una restricción estaba prevista por la ley, se debe determinar si dicha medida era previsible. Es decir, debe estar formulada con la suficiente precisión para facultar a la persona regular su conducta previendo las consecuencias que una determinada conducta puede producir. Dichas consecuencias no requieren ser previsibles con absoluta certeza, pues la experiencia demuestra que esto es inalcanzable. Mientras la certeza en la ley es altamente deseable, ésta puede producir una rigidez excesiva y la ley debe de ser capaz de mantener el paso con las circunstancias cambiantes.⁸²

54. El CPC tipifica el delito de instigación a delinquir de la siguiente manera: “El que públicamente incite a

⁸⁰ Corte IDH. *La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos)*. Opinión Consultiva OC-5/85, *supra* nota 33, párr. 42; *Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú* *supra* nota 59, párr. 154; ECHR, *Müller and Others v. Switzerland*, Judgment of 24 May 1988, Application No. 10737/84 para. 32; y *Sürek and Özdemir v. Turkey*. Judgment of 8 July 1999, Applications Nos. 23927/94 and 24277/94, párr. 57 (iii).

⁸¹ Corte IDH. *Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú*. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de Septiembre de 1998. Serie C No. 41, párr. 121; *Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela*. *supra* nota 29, párr. 55; y *Caso Yvon Neptune Vs. Haití*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 125.

⁸² *Cfr.* ECHR. *Feldek v. Slovakia*, Judgment of 12 July 2001, Application number 29032/95 para. 56; *Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. France*, Judgment of 22 October 2007, Applications nos. 21279/02 and 36448/02, para. 41; y *Chauvy and Others v. France*, Judgment of 29 June 2004, Application no. 64915/01, para. 43.

otro u otros a la comisión de un de un determinado delito o género de delitos, incurrirá en arresto de 3 meses a 3 años”. Asimismo, el CPC establece que “comete homicidio aquel que cause la muerte a otro.” Dichos tipos penales acotan y definen claramente la conducta punible, por lo que resulta claramente previsible que cualquier persona que realice la conducta señalada se hará acreedora a las penas establecidas en el mismo Código.

55. Por otro lado, las sentencias en contra de Melanie Pereira, Francis Hoffman y William Garra, por los delitos de instigación a delinquir y homicidio, respectivamente, persiguen mantener el orden público, el cual es considerado como fin legítimo por el artículo 13.2 de la CADH.

56. El Estado reconoce que, en virtud del principio de mínima intervención penal, así como del principio de *última ratio* de las sanciones penales, es necesario utilizar dicho instrumento en la medida estrictamente necesaria para proteger bienes jurídicos fundamentales.⁸³ A este respecto, la Corte ha señalado que no toda medida penal relativa a la libertad de expresión es contraria a la CADH, sin embargo “esta posibilidad se debe analizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de aquéllas, el dolo con que actuó, las características del daño injustamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales”.⁸⁴ Así, los hechos imputados a Melanie Pereira, Francis Hoffman y William Garra fueron de tal gravedad que el instrumento penal resulta idóneo para salvaguardar el orden público.⁸⁵

57. Asimismo, la Corte EDH ha señalado que “se mantiene abierta la posibilidad para las autoridades competentes de un Estado de adoptar, en su carácter de garantes del orden público, medidas, incluso de naturaleza penal, dirigidas a reaccionar apropiadamente y sin exceso a dichas declaraciones. “[C]uando dichas declaraciones incitan a la violencia en contra de un individuo, un funcionario público o algún sector de la población, las autoridades del Estado gozan un margen de apreciación mayor al examinar la necesi-

⁸³ Corte IDH. *Caso Kimel Vs. Argentina*. *supra* nota 33, párr. 76.

⁸⁴ Corte IDH. *Caso Kimel Vs. Argentina*. *supra* nota 33, párr. 78; y *Caso Tristán Donoso Vs. Panamá*. *supra* nota 74, párr. 120.

⁸⁵ *Cfr.* Corte IDH. *Caso Kimel Vs. Argentina*. *supra* nota 33, párr. 71; y *Caso Tristán Donoso Vs. Panamá*. *supra* nota 74, párr. 118.

dad de una interferencia a la libertad de expresión.”⁸⁶ La misma Corte EDH ha establecido que “al decidir si existió una ‘necesidad social imperiosa’ capaz de justificar la interferencia al ejercicio de la libertad de expresión, se debe de hacer una distinción cuidadosa entre hechos y opiniones”,⁸⁷ ya que la existencia de hechos puede ser demostrada, mientras que la veracidad de las opiniones no es susceptible de prueba.⁸⁸

58. Los hechos en los que se basaron las condenas se refieren a las expresiones realizadas por William Garra a través de Radical Radio y Radio Su-Versión en el contexto de la cobertura del “Facebookazo”. En aquella ocasión, el Sr. Garra denunció que elementos de la Guardia Federal habían sido enviados para impedir la marcha en San Pedro y que los terratenientes habían contratado personas ajenas a la comunidad para realizar supuestas marchas de apoyo al Gobierno. Desde su transmisión, Garra invitó a los participantes a que no permitieran la interrupción de la marcha y alentó a la gente a “defender sus derechos a toda costa contra la avanzada autoritaria de la oligarquía terrateniente”. Resulta claro que dichas declaraciones se refirieron a hechos y no a opiniones, sobre los cuales no existía ningún elemento para inferir su veracidad, ya que el Sr. Garra ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos, sino que transmitía desde las instalaciones de Radical Radio. Al respecto la Corte ha advertido que los periodistas tienen la obligación de tomar cierta distancia crítica de sus fuentes, contrastándolas con otros datos relevantes,⁸⁹ así como observar un grado de diligencia mayor en virtud del clima de tensión y polarización política⁹⁰ que existía en Chirilagua.

59. En el mismo sentido, la Corte EDH ha establecido que se debe “examinar si las víctimas actuaron de buena fe y cumplieron con la obligación periodística ordinaria de verificar una acusación sobre hechos. Esta obligación requiere que quien realiza una afirmación se apoye en una base lo suficientemente precisa y confiable, la cual pueda ser considerada proporcional a la naturaleza y grado de la acusación, en virtud de

⁸⁶ Cfr. ECHR. *Ceylan v. Turkey*, Judgment of 8 July 1999, Application no. 23556/94, para. 34; y *Arslan v. Turkey*, judgment of 8 July 1999, Application no. 23462/94, para. 46.

⁸⁷ Cfr. ECHR. *Cumpănă and Mazăre v. Romania*, Judgment of 17 December 2004, Application no. 33348/96, para. 99.

⁸⁸ Cfr. ECHR. *Pedersen and Baadsgaard v. Denmark*, 17 December 2004, Application no. 49017/99, para. 76; *Europapress Holding D.O.O. v. Croatia*, Judgment of 22 October 2009, Application no. 25333/06, para. 54 (a); *Steel and Morris v. The United Kingdom*, Judgment of 15 February 2005, Application no. 68416/01, para. 87; *Unabhängige Initiative Informationsvielfalt v. Austria*, Judgment of 26 February 2002, Application no. 28525/95, 39; y *Ukrainian Media Group v. Ukraine*, Judgment 29 March 2005, Application no. 72713/01, para. 41.

⁸⁹ Cfr. Corte IDH. *Caso Kimel Vs. Argentina*. *supra* nota 33, párr. 79.

⁹⁰ Cfr. ECHR. *Ceylan v. Turkey*, *supra* nota 86, para. 35; y *Arslan v. Turkey*, *supra* nota 86, para. 40.

que mientras más seria sea la acusación, más sólida debe ser la base fáctica”.⁹¹ La Corte ha adoptado el mismo criterio al considerar que los periodistas tienen el deber de constatar en forma razonable, los hechos en que fundamentan su información, lo que implica el derecho de las personas de no recibir una versión manipulada de los hechos.

60. Si bien, la CIDH ha señalado que para que el Estado pueda imponer responsabilidades ulteriores con el fin de mantener el orden público, “no resulta suficiente invocar meras conjeturas sobre eventuales afectaciones del orden, ni circunstancias hipotéticas derivadas de interpretaciones de las autoridades frente a hechos que no planteen claramente un riesgo razonable de disturbios graves (‘violencia anárquica’).”⁹² Es importante mencionar que en el presente caso, no se trató de meras conjeturas sobre las eventuales alteraciones al orden, sino que como resultado directo e inmediato de informaciones falsas, se originó la confusión entre los manifestantes que provocó el enfrentamiento en San Pedro, dejando como saldo 6 personas muertas y 15 heridos.

61. Respecto del requisito de proporcionalidad, es importante señalar que el Juzgado Criminal, después de haberse allegado de todos los elementos necesarios para fundamentar su decisión y tomando en cuenta la gravedad de la ofensa, la duración de la actividad ilegal y el tipo de delito, condenó por un lado a Melanie Pereira y Francis Hoffman conjuntamente por los delitos de Instigación a Delinquir y Difamación, a la pena mínima prevista por el CPC para el segundo de estos delitos; y por el otro lado, a William Garra conjuntamente por los delitos de Instigación a Delinquir, Difamación y Homicidio, a 12 años de prisión por su mayor responsabilidad y la gravedad de la ofensa. En virtud de lo anterior, es claro que las penas impuestas en primera instancia y confirmadas por el Tribunal de Apelaciones, fueron proporcionales.

62. Por último, es importante mencionar que la Corte EDH ha establecido en su jurisprudencia que los editores y directores de medios de comunicación, pueden ser sujetos de responsabilidades ulteriores por el

⁹¹ Cfr. ECHR. *Pedersen and Baadsgaard v. Denmark*, supra nota 88, para. 78

⁹² CIDH. Informe 20/99, Caso 11.317 *Rodolfo Robles Espinoza e Hijos* (Perú), 23 de febrero de 1999, párr. 153; y Corte IDH. *Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela*, supra nota 29, párr. 89.

ejercicio indebido de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación a su cargo.⁹³ En virtud de las consideraciones anteriores, el Estado considera las responsabilidades ulteriores impuestas por los hechos antes señalados, no violan el artículo 13.2 de la CADH.

Respecto de las condenas por el delito de “Difamación”

63. El Estado reconoce la importancia del rol que juegan los medios de comunicación “como vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión en una sociedad democrática.”⁹⁴ En este sentido, la Corte EDH ha señalado que la prensa no solo tiene la labor de impartir dicha información y opiniones, sino que el público también tiene el derecho de recibirlas, ya que de otra forma la prensa se vería imposibilitada de desempeñar su rol de vigilante de los intereses públicos (“public watchdog”). Sin embargo, esa libertad no es ilimitada, por lo que la prensa no debe “traspasar ciertos límites, en particular en lo que respecta a la reputación y derechos de terceros”.⁹⁵

64. Los hechos en los que el Juez se basó para imputar responsabilidad penal se refieren al programa de radio conducido por William Garra en donde realiza una imitación del Presidente Atilio Escalante, a través de la caracterización de un personaje llamado “Fatilio Estafante”, quien constantemente es ridiculizado y señalado como un “señorito feudal, bueno para nada, insensible, voraz y corrupto”. El Estado considera que dichas sentencias no son violatorias de la CADH, en virtud de las siguientes consideraciones:

65. Tanto la Corte IDH, como la Corte EDH, han establecido en su jurisprudencia que para que un tipo penal cumpla con el principio de legalidad, previsto por el art. 9 de la CADH, se deben emplear términos estrictos y unívocos, que fijen claramente sus elementos⁹⁶ y estar formulados con la suficiente precisión a

⁹³ ECHR. *Chauby and Others v. France*, supra nota 82; y *Radio France and Others v. France*, Judgment of 30 March 2004, Application no. 53984/00.

⁹⁴ Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*. supra nota 35, párr. 117; *Caso Kimel Vs. Argentina*. supra nota 33, Voto del Juez García-Sayán, párr. 9; y *Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay*. supra nota 35, párr. 94.

⁹⁵ Cfr. ECHR. *Thoma v. Luxembourg*, Judgment of 29 March 2001, Application no. 38432/97, para. 45; y *Colombani and Others v. France*, Judgment 22 June 2002, Application no. 51279/99, para. 55.

⁹⁶ Cfr. Corte IDH. *Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú*, supra nota 81, párr. 121; *Caso Kimel Vs. Argentina*, supra nota 33, párr. 63; y *Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela*, supra nota 29, párr. 55.

fin de que la consecuencia a una determinada conducta sea previsible para el ciudadano común.⁹⁷ El delito de Difamación, previsto por el CPC,⁹⁸ fija claramente los elementos del tipo, por lo que las supuestas víctimas conocían perfectamente las consecuencias que podrían resultar de sus actos u omisiones.

66. Según el art. 13.2 de la CADH, el derecho a la protección de la honra y la reputación consagrado el art. 11 de la misma, puede ser motivo para fijar responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de la libertad de expresión, por lo que “es legítimo que quien se considere afectado en su honor recurra a los medios judiciales que el Estado disponga para su protección.”⁹⁹

67. La Corte IDH ha reconocido que tanto la libertad de expresión como el derecho a la reputación y a la honra son de gran importancia, por lo que es necesario garantizar el ejercicio de ambos. En este sentido, la prevalencia de uno de estos derechos sobre el otro “dependerá de la ponderación que se haga a través de un juicio de proporcionalidad. La solución del conflicto que se presenta entre ciertos derechos requiere el examen de cada caso, conforme a sus características y circunstancias, para apreciar la existencia e intensidad de los elementos en que se sustenta dicho juicio.”¹⁰⁰ Es en ese proceso de armonización en el que el Estado debe buscar establecer las sanciones necesarias para obtener dicho propósito,¹⁰¹ las cuales deben “responder a un criterio de estricta proporcionalidad.”¹⁰²

68. Adicionalmente, se ha establecido que cuando se trate de críticas a funcionarios públicos, las restricciones deben “lograr una importante satisfacción del derecho a la reputación, sin hacer nugatorio el derecho a la libre crítica contra la actuación de los funcionarios públicos. Para efectuar esta ponderación se debe analizar i) el grado de afectación de uno de los bienes en juego, determinando si la intensidad de dicha afecta-

⁹⁷ Cfr. ECHR. *Feldek v. Slovakia*, *supra* nota 82, para. 56; y *Tammer v. Estonia*, Judgment 6 february 2001, Application no. 41205/98, para. 37.

⁹⁸ “El que comunicándose con varias personas reunidas o separadas, hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo al desprecio o al odio público, u ofensivo a su honor o reputación, será castigado con prisión de tres a dieciocho meses. Si el delito se cometiere en documento público o con escritos, dibujos divulgados o expuestos al público, o con otros medios de publicidad, la pena será de seis a veinticuatro meses de prisión.”

⁹⁹ Corte IDH. *Caso Kimel Vs. Argentina*. *supra* nota 33, párr. 55; *Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela*. *supra* nota 29, párr. 46; y *Caso Tristán Donoso Vs. Panamá*. *supra* nota 74, párr. 111.

¹⁰⁰ Corte IDH. *Caso Kimel Vs. Argentina*. *supra* nota 33, párr. 84; y *Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela*. *supra* nota 29, párr. 80.

¹⁰¹ Corte IDH. *Caso Kimel Vs. Argentina*. *supra* nota 33, párr. 75; y *Caso Tristán Donoso Vs. Panamá*. *supra* nota 29, párr. 112.

¹⁰² Corte IDH. *Caso Kimel Vs. Argentina*. *supra* nota 33, párr. 56.

ción fue grave, intermedia o moderada; ii) la importancia de la satisfacción del bien contrario, y iii) si la satisfacción de éste justifica la restricción del otro. En algunos casos la balanza se inclinará hacia la libertad de expresión y en otros a la salvaguarda del derecho a la honra.”¹⁰³ Igualmente, en la determinación de la necesidad de la restricción se “debe examinar el caso desde la postura del razonamiento adoptado por las cortes internas.”¹⁰⁴ Si bien las expresiones críticas a Atilio Escalante, por su carácter de Presidente de Chirilagua deben de gozar “un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público”,¹⁰⁵ y por tanto debe demostrar un mayor grado de tolerancia. Sin duda, el art. 13.2 “permite la protección de la reputación de los demás —es decir, de todas las personas- y esta protección comprende también a los políticos, aún cuando no estén actuando en carácter de particulares”,¹⁰⁶ por lo que el honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas debe ser jurídicamente protegido de manera acorde con los principios del pluralismo democrático.¹⁰⁷

69. Lo anterior cobra especial importancia “respecto de quien ha sido injuriado, particularmente si se trata de una imputación de un delito grave con respecto a un individuo”, como en el presente caso, en donde el Tribunal estableció que William Garra imputó, falsamente y de manera reiterada, actos de corrupción a Atilio Escalante, buscando afectar su reputación. En este sentido, el argumento de que el personaje “Fátilio Escalante” es producto de la imaginación y que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, no es defensa admisible, en virtud de que, como la Corte EDH ha señalado, es irrelevante el hecho de que no se mencione por su nombre a la persona que se injuria cuando por las características de dicha persona y las circunstancias del país, ésta resulta claramente identificable.¹⁰⁸ Además constituye un abuso a la libertad de expresión cuando se utilizan insultos para efectuar críticas, siendo que podrían haber sido transmitidas sin el

¹⁰³ Corte IDH. *Caso Kimel Vs. Argentina*, *supra* nota 33 párr. 84; y *Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela*, *supra* nota 29, párr. 8.

¹⁰⁴ Cfr. ECHR. *Gündüz vs. Turkey*, judgment of 4 December 2003, Application no. 35071/97, para. 46.

¹⁰⁵ Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*, *supra* nota 35, párr. 128.

¹⁰⁶ Corte IDH. *Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay*, *supra* nota 35, párr. 102; ECHR. *Case of Lingens vs. Austria*, Judgment of 6 July 1986, Application no. 9815/82, para. 42; y *Dichand and Others v. Austria*, judgment of 26 February 2002, Application no. 29271/95, para. 39.

¹⁰⁷ Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*, *supra* nota 35, párr. 128; *Caso Tristán Donoso Vs. Panamá*, *supra* nota 74, párr. 90; y *Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay*, *supra* nota 35, párr. 100.

¹⁰⁸ Cfr. ECHR. *Thoma v. Luxembourg*, *supra* nota 95, para. 56.

uso de insultos o descalificaciones.¹⁰⁹

70. Es importante reiterar que la sanción impuesta se basó en afirmaciones sobre hechos, no opiniones. Sin embargo, incluso una opinión puede considerarse excesiva cuando no cuenta con una base fáctica que la respalde.”¹¹⁰ Adicionalmente, no se impuso la carga de la prueba sobre las declaraciones difamatorias a los imputados, y se utilizó el estándar de la “real malicia” por medio del cual se demostró que quien se expresó, lo hizo con plena intención de causar un daño y con conocimiento de que se estaban difundiendo informaciones falsas o con un evidente desprecio por la verdad de los hechos.¹¹¹

71. Cabe señalar que el impacto potencial del medio de comunicación respectivo debe de ser un factor importante en la determinación de la proporcionalidad de una interferencia a la libertad de expresión.¹¹² En el presente caso, en virtud de que se trató de transmisiones de radio con un amplio nivel de audiencia, es claro que tuvieron un alto nivel de impacto, por lo que el daño causado a la honra y a la reputación fue mayor. Asimismo, es importante reiterar que, por un lado, Melanie Pereira y Francis Hoffman fueron condenados por los delitos de Instigación a Delinquir y Difamación a través de medios de publicidad, a la pena mínima prevista por el CPC para el segundo de estos delitos, conmutable por una multa equivalente a 6 salarios mínimos mensuales elevados al año; mientras que William Garra, por su mayor responsabilidad en esos delitos, y por su culpabilidad por el delito de homicidio, fue sentenciado a una pena superior; por lo que resulta evidente que las penas fueron determinadas por criterios objetivos y proporcionales.

72. Por último, respecto de la responsabilidad de Melanie Pereira y Francis Hoffman, es importante reiterar que los editores y directores de medios de comunicación pueden ser sujetos de responsabilidades ulteriores por el ejercicio indebido de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación a su cargo.¹¹³

Por los anteriores argumentos, el Estado considera que las responsabilidades ulteriores impuestas a las pre-

¹⁰⁹ Cfr: ECHR. *Constantinescu v. Romania*, 27 June 2000, Application no. 28871/95, Judgment of 27 June 2000 para. 74.

¹¹⁰ Cfr: ECHR. *Cumpănă and Mazăre v. Romania*, supra nota 87, para. 99.

¹¹¹ CIDH. Relatoría para la Libertad de Expresión. *Informe Anual 2008*. 25 de febrero 2009. OEA/Ser.L/V/II.134.

¹¹² Cfr: ECHR. *Klein v. Slovakia*, Judgment 31 October 2006, Application no. 72208/01, para. 47; y *Radio France and Others v. France*, supra nota 93, para. 39.

¹¹³ Cfr: ECHR. *Chauvy and Others v. France*, supra nota 82; y *Radio France and Others v. France*, supra nota 93.

suntas víctimas por el delito de Difamación no son violatorias de los arts. 13 y 9 de la CADH, ya que, están previstas en ley; perseguían el fines legítimos, y fueron necesarias en una sociedad democrática.

6. Supuesta violación de los arts. 8 y 25 en conexión con el artículo 1.1 de la CADH

73. El art. 8 de la CADH consagra el derecho al debido proceso, que consiste, en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley para la determinación de sus derechos.¹¹⁴

74. Las garantías que establece esta norma deben ser observadas en los distintos procedimientos en que los órganos estatales adoptan decisiones sobre la determinación de derechos de las personas, ya que el Estado también otorga a autoridades administrativas, colegiadas o unipersonales, la función de adoptar decisiones que determinan derechos.¹¹⁵ De esta forma, las garantías contempladas en el artículo 8.1 de la CADH son también aplicables al supuesto en que alguna autoridad administrativa adopte decisiones que determinen tales derechos¹¹⁶, tomando en cuenta que no le son exigibles aquellas propias de un órgano jurisdiccional, pero sí debe cumplir con aquellas garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria¹¹⁷.

75. En el presente caso, tanto las decisiones administrativas como los procedimientos judiciales interpuestos para controvertir dichas decisiones, cumplieron con las garantías del debido proceso aplicables. En particular, las decisiones administrativas cumplieron con el requisito de debida fundamentación y motivación¹¹⁸ por lo que no pueden ser consideradas como arbitrarias; además, dichas decisiones pudieron ser recurridas ante órganos jurisdiccionales.

76. Por otro lado, el art. 25 garantiza a toda persona el derecho a un recurso rápido y sencillo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. Al respecto, esta Corte ha dispuesto que los recursos deberán ser “adecuados”, lo que significa que deben ser idóneos

¹¹⁴ Cfr: Corte IDH. *Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua*. *supra* nota 31, párr. 74; *Caso Yvon Neptune Vs. Haití*. *supra* nota 81, párr. 79; y *Caso Salvador Chiriboga Vs Ecuador*. *supra* nota 59, párr. 56.

¹¹⁵ Cfr: Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 118.

¹¹⁶ Cfr: Corte IDH. *Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú*, *supra* nota 59, párr. 105; *Caso Yatama vs. Nicaragua*. *supra* nota 68, párr. 149; y *Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú*, Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 69.

¹¹⁷ Cfr: Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. *supra* nota 115, párr. 119.

¹¹⁸ Cfr: Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. *supra* nota 115, párr. 120.

para proteger la situación jurídica infringida.¹¹⁹ Igualmente, deberán ser “efectivos”, entendiendo por esto que sean capaces de producir el resultado para el que han sido concebidos¹²⁰.

77. La acción de constitucionalidad que fue accionada en el presente caso, era adecuada y efectiva para controvertir las decisiones administrativas, que según los representantes vulneraban derechos humanos, en virtud de que a través de dicho recurso, era posible revertir la decisión administrativa al contrastar los motivos de la medida y la legislación aplicable con la CC y la propia CADH. Además, dichos recursos fueron sustanciados respetando de manera estricta las garantías del debido proceso. Si bien, la determinación de los Tribunales de Circuito y de los Tribunales de Apelaciones, no fue favorable para los promoventes, esto no implica que la presunta víctima no haya tenido a un recurso efectivo.¹²¹

78. Por su parte, los procesos penales analizados anteriormente, cumplieron con todas las garantías del debido proceso penal, incluyendo el derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior, garantizando el derecho un recurso efectivo, según los artículos 8.2.h. y 25 de la CADH. En virtud de las consideraciones anteriores el Estado considera que no deben declararse violados los artículos 8 y 25 de la CADH.

VI. PETITORIO

79. El Estado de Chirilagua solicita a esta Honorable Corte que con base a los hechos probados y los argumentos presentados a lo largo del proceso:

1. Declare estimadas las excepciones preliminares de 1) Incompetencia de la Corte *rationae personae* y 2) Falta de agotamiento de los recursos internos.
2. Desestime las supuestas violaciones a los artículos 8, 9, 13, 21, 24 y 25 en conexión con los arts. 1.1 y 2 de la CADH.
3. Deseche la solicitud de reparaciones por parte de los representantes de las víctimas, así como al pago

¹¹⁹ Cfr. Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 64, *Caso Godínez Cruz Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 67; y *Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6 párr. 88.

¹²⁰ Cfr. Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. supra nota 119, párr. 66, *Caso Godínez Cruz Vs. Honduras*. supra nota 119, párr. 69; y *Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras*. supra nota 119, párr. 91.

¹²¹ Cfr. Corte IDH. *Caso Raxcacó Reyes vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 112; y *Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126, párr. 83.

de gastos y costas, tanto en el ámbito interno como internacional.